



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 19.399/2023

**“CRUZ TOMASA c/MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

TOMASA CRUZ impugna la Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social N° 19432 del 27 de septiembre de 2022 que le impuso una multa de \$ 43.653,35 por infracción al artículo 40 de la ley 11.683 al considerarla incurso en incumplimiento al debido registro de alta temprana respecto de un trabajador. Concretamente la apelante rechaza el planteo, peticiona se declare la inconstitucionalidad de la regla solve et repete por entenderla inconstitucional. Afirma integrar, con su esposo e hijo, una empresa familiar, que se presentó en sede administrativa en forma anticipada para efectuar un descargo por no poder acudir por razones de salud a la audiencia fijada al efecto y que no obstante ello fue sancionada por aplicación de la presunción contenida por el art. 23 de la LCT en forma irregular ya que no figura en el acta labrada que los inspectores actuantes constataran que el Sr. Luere realizara tareas propias de un operario en el establecimiento por ella explotado.

Ahora bien, la regla “solve e repete” traduce una exigencia impuesta por el legislador a fin que se pueda impugnar judicialmente una determinación previsional o impositiva efectuada por el Fisco (conf. Christensen, Eduardo A, “El solve et repete, Incidencia de la reforma constitucional”, LL 1996-B-1189; Jarach, Dino, “Estudios de Derecho Tributario”, p. 241, ed. Cima, 1998) y su validez constitucional fue aceptada por el Superior Tribunal de la Nación (conf. CSJN, 30/4/74, “Adelphia SAIC s/sumario”, Fallos 288:287; 21/12/89, “Micrómnibus Barrancas de Belgrano”, Fallos 312:2490) y, aunque coincido con el argumento de la apelante en cuanto a que el pago previo debe flexibilizarse en materia de sanciones punitivas (CSJN 5/6/07, “Gubelco SRL c/AFIP”, Fallo G,2212, XXXIX, -RHE), no puedo ignorar que se ha declarado constitucional el art. 11 de la ley 18.695 -es decir una norma análoga a la reputada como inconstitucional en este causa- en cuanto establece la obligación del pago previo de la multa para poder recurrir una resolución de la autoridad administrativa,

Fecha de firma: 14/09/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37739760#379263915#20230914113035516



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

salvo supuestos especiales de montos elevados o desproporcionados con relacion a la concreta capacidad de pago del obligado (CSJN, 10/11/15, “Giabbo SRL”) lo que no puede afirmarse de la sanción impuesta ya que: su monto no es exorbitante: \$ 43.653,35. Por otra parte no se acompañó informe contable que acredite la imposibilidad de la recurrente de cumplir con la exigencia impuesta por el órgano administrador.

Sin perjuicio de lo anterior, que me llevará a declarar no habilitada la presente instancia, debo destacar que la recurrente presentó, en sede administrativa, un escrito de descargo pero limitándose a afirmar que la persona encontrada en su establecimiento no es dependiente suyo sino que desempeña tareas para un colega que le había remitido unos pollos para salvar una situación de emergencia por haberse quedado sin mercadería para vender.

Cabe aclarar que la impugnante explota una rotisería conjuntamente con su esposo e hijo (ver escrito de descargo presentado el 3 de diciembre de 2.021).

Ahora bien, la apelante en ningún momento ofreció prueba a fin de corroborar lo denunciado. Tampoco individualizó a la persona que, a tenor de sus dichos, sería el empleador del señor Lorenzo Moisés Luere.

Por el contrario, lo aseverado por los inspectores es que fueron atendidos por el Sr. Luere y que éste se encontraba realizando tareas en el establecimiento explotado por Tomasa Cruz dedicado a la venta de pollos rostizados.

Ahora bien, queda claro que el acta labrada en los términos del artículo 37 de la ley 25.877, emanada de un funcionario público, en uso de las facultades conferidas por el ordenamiento legal, da fe de los hechos que éste afirma sucedidos. Lo que el inspector no puede hacer es interpretar jurídicamente esos hechos a través del acta que redacta puesto que dicho acta no constituye un acto administrativo en sentido estricto (conforme lo regula el título III de la ley 19.549) sino que debe considerarse como un acto preparatorio de la resolución que el organismo administrativo, finalmente, dictará en base a los elementos arribados a la causa.

En virtud de lo anterior y conforme surge del acta de inspección obrante en la causa, hay elementos fácticos que no fueron rebatidos por la impugnante en su memorial recursivo ni tampoco se acompañaron elementos probatorios que refuten la presunción que emana del artículo 23 de la LCT invocada por el Ministerio actuante.

Cabe tener presente que dicha presunción es iuris tantum por lo que es susceptible de ser alterada por prueba en contrario, constituyéndose en un elemento técnico que puede llevar a desbaratar situaciones de simulación o





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

fraude, pero en el caso que nos ocupa, y como ya lo expresara, no se han acompañado elementos que permitan desvirtuarla.

Por todo lo expuesto propongo no hacer lugar a la habilitación de esta instancia judicial, se impongan las costas a la apelante (art. 68 CPCCN) y regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 4 UMA (\$ 77.352) y los correspondientes a la dirección letrada de la parte actora en 2 UMA (\$ 38.676) conf. CSJN Ac. 19/2023, importes a los que se agregara IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero a la solución del voto de la Dra. Dorado.

En virtud de lo expresado el Tribunal **RESUELVE:** 1º) No habilitar la presente instancia, 2º) Imponer las costas a la apelante (art. 68 CPCCN) 3º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 4 UMA (\$ 77.352) y los que retribuyen la tarea realizada por la asistencia letrada de la parte actora en 2 UMA (\$ 38.676) conf. CSJN Ac. 19/2023, importes a los que se agregara IVA en caso de corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente remítase.

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

